

República de Colombia
Rama Judicial del Poder Público



Juzgado Diecinueve Civil Municipal

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintiuno (2021).

Proceso Nro.	: 11001-40-03-019-2017-01151-00.
Clase de proceso	: Ejecutivo Singular
Demandante	: Bancolombia S.A.
Demandados	: Kalamata INV S.A.S. y otro
Asunto	: Sentencia

I. Objeto a Decidir

Procede el Juzgado a proferir la correspondiente sentencia, resolviendo la excepción de mérito que, en oportunidad propuso la curadora designada para representar a la parte demandada, lo anterior de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 278 del Código General del Proceso.

II. Antecedentes

A).- Demanda:

BANCOLOMBIA S.A., por intermedio de apoderado, presentó demanda contra KALAMATA INV S.A.S. y PEDRO HERNANDO RINCÓN LEÓN, para obtener el pago de las sumas de dinero contenidas en los pagarés No. 46181003293 y No. 46169769905 aportados como base de la acción.

B).- Admisión y Contestación:

1.- Asumido el conocimiento de la demanda que desata la presente litis, el Juzgado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 431 del Código General del Proceso, libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva de mínima cuantía a favor BANCOLOMBIA S.A. y en contra de KALAMATA INV S.A.S. y PEDRO HERNANDO RINCÓN LEÓN, para que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de dicha determinación, cancelaran las sumas indicadas en la orden de apremio.

2.- Atendiendo que no fue posible notificar personalmente al extremo demandado, mediante proveído del 14 de febrero de 2019 (fl.117) se decretó el emplazamiento de los mismos.

3.- El apoderado de la parte actora cumplió con la carga procesal conforme se verifica a folio 118 aportando constancia de la publicación del emplazamiento en el periódico el Nuevo Siglo, por su parte la secretaria del Juzgado, efectuó la correspondiente inclusión en el Registro de Personas Emplazadas (fls.121 fte y vto).

4.- Transcurrido el término del emplazamiento previsto en el art. 108 del Código General del Proceso, sin que compareciera el extremo demandado a hacerse parte en el presente proceso, por auto de fecha 20 de mayo de 2019 (fl.123), el Juzgado les designó *curador – ad litem*; sin embargo, atendiendo que el auxiliar designado no compareció a tomar posesión del cargo, se procedió a su relevo nombrando para tal fin a la abogada XIMENA ALEJANDRA VELASQUEZ SALCEDO (fl.129), quien se notificó personalmente del mandamiento de pago, el 23 de marzo de 2021 (fl.143).

5.- Dentro del término de traslado la curadora formuló la excepción de mérito de prescripción de la acción cambiaria (fls. 114 y 145).

6.- Del medio exceptivo propuesto, se ordenó correr traslado (fl.147) y el apoderado de la parte demandante en oportunidad describió el mismo a través de escrito obrante a folios 148 y 149.

7.- Ahora bien, a partir del 1 de enero de 2016 entró en vigencia el Código General del Proceso en todo el territorio nacional, de manera que habiendo sido sometida la demanda a reparto el 24 de octubre de 2017 (fl.26), corresponde dar aplicación en su integridad las normas procesales allí previstas, de este modo, según lo dispuesto en el nuevo estatuto, surtido el traslado de las excepciones de mérito “el juez citará a la audiencia prevista en el artículo 392, cuando se trate de procesos ejecutivos de mínima cuantía [Núm. 2 artículo 443].

Bajo ese entendido, el artículo 3 del nuevo ordenamiento jurídico, consagra como principio del régimen procedimental que “las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva”; de ahí que de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del párrafo 3 del artículo 390 del Código General del Proceso “Cuando se trate de procesos verbales sumarios, el juez podrá dictar sentencia escrita vencido el término de traslado de la demanda y sin necesidad de convocar a la audiencia de que trata el artículo 392, si las pruebas aportadas con la demanda y su contestación fueren suficientes para resolver de fondo el litigio y no hubiese más pruebas por decretar y practicar.” (Subrayado fuera de texto)

Disposición que se acompasa con lo establecido en el art. 278 *ejusdem*, el cual contempla igualmente que, el Juez podrá dictar sentencia anticipada, en cualquier estado del proceso, en los siguientes eventos: “2. *Cuando no hubiere pruebas por practicar.*”, supuestos que de contera conllevan a la pretermisión de etapas procesales establecidas para su cumplimiento, mismas que sin embargo y, en aplicación a los principios de celeridad y por economía procesal, el legislador previó los eventos en los que se puede obviar su realización¹.

¹ CSJ Civil, 15/Agosto/2017, Rad. 11001-02-03-000-2016-03591-00, Luis Alonso Rico Puerta, posición reiterada en sentencia por la CSJ Civil, 3/Noviembre/2017, Rad. 11001-02-03-000-2017-01205-00, Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.

Así pues, revisado el asunto bajo análisis, observa el Juzgado que las documentales obrantes en el expediente son suficientes para resolver de fondo el asunto, amén que ninguna de las partes solicitó el decretó de otras diferentes a las ya obrantes en el proceso, por lo tanto, no se considera necesario decretar y practicar otras pruebas, razón por la que encontrándose vencido el traslado de la demanda, se procederá a dictar sentencia por escrito.

III. Problema Jurídico

El problema jurídico a resolver en este caso es determinar si se debe ordenar seguir adelante la ejecución por reunirse los requisitos para ello, o si el medio exceptivo propuesto por la pasiva logra enervar la obligación contenida en los títulos báculo de la acción ejecutiva.

IV. Consideraciones

1.- En el presente asunto no existe la posibilidad de formular objeción alguna respecto de la presencia de los presupuestos jurídico-procesales requeridos para la correcta conformación del litigio, toda vez que se cuenta con una demanda correctamente formulada; con la capacidad de las partes para obligarse y para comparecer al proceso, así como con la competencia del esta juzgadora para definir el asunto dejado a su consideración, atendiendo el factor objetivo de la cuantía.

2.- Se observa que los elementos de la acción ejecutiva se presentan sin ambigüedad alguna, ya que los documentos presentados como base de las pretensiones cumplen con las exigencias generales y particulares establecidas en los artículos 621 y 709 del estatuto mercantil, que además de dar contener obligaciones claras, expresas y exigibles provenientes del deudor, constituyen plena prueba en su contra, lo que autoriza a la parte demandante para formular la acción cambiaria por la vía ejecutiva al tenor del precepto 422 de la normatividad procesal civil. Igualmente, goza de la presunción de autenticidad, tal como lo disponen los cánones 244 ibídem y 793 del Código de Comercio.

3.- Ahora, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 619 del estatuto mercantil: *"Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación, y de tradición o representativos de mercancías."*, norma en virtud de la cual debemos desarrollar el principio de la literalidad que delimita el contenido, la extensión y la modalidad del derecho que se incorpora en el título valor. Sin embargo, el obligado cambiario puede invocar en su defensa las excepciones establecidas en el Art. 784 del C. de Co.

4.- En este orden de ideas, procede esta instancia a resolver la excepción de prescripción, así:

4.1.- Prescripción de la acción cambiaria:

El artículo 2513 del Código Civil consagra que “*El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio*”, y de conformidad con el artículo 2535 del mismo código, la prescripción que extingue las acciones o derechos de otros, exige sólo el transcurso de cierto tiempo que, en cada caso, es fijado expresamente por el legislador. Es así como el artículo 789 del Código de Comercio establece en tres (3) años el término prescriptivo de la acción cambiaria directa, contabilizados a partir del día de vencimiento.

Para el caso sub-examine, debe tenerse en cuenta que, el inciso primero del artículo 94 del Código General del Proceso es claro al señalar que: “La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquella, o el de mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos sólo se producirán con la notificación al demandado.”(Subrayado y negrillas fuera del texto).

5.- En el asunto objeto de análisis, se evidencia que la ejecución se encuentra respaldada en el ejercicio de la acción cambiaria con la finalidad de obtener el pago del derecho crediticio incorporado en los pagarés No. 46181003293 y No. 46169769905, los que una vez revisados revelan como fecha de vencimiento el 7 de mayo y 4 de abril de 2017, data desde la que una vez efectuado el respectivo computo se concluye que el período prescriptivo estaría llamado a configurarse el 7 de mayo y 4 de abril de 2020 respectivamente.

Es necesario advertir que, el Art. 2539 del Código Civil dispone: “*La prescripción que extingue las acciones ajenas, puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente.*”

6.- Sin embargo, la jurisprudencia de la H. Corte Suprema de Justicia, en reiteradas oportunidades al interpretar las normas que regulan el término extintivo, ha señalado que dicho plazo no opera de manera automática, sino que debe observarse desde una perspectiva subjetivista, cuyo fin es el de evitar las consecuencias nocivas de demandas que se interponen con premeditada tardanza, pero también la extinción de derechos sustanciales, por causas no atribuibles a quien legítimamente los reclama, así:

“... la interrupción civil – tiene dicho la Corte- de la prescripción tanto adquisitiva como extintiva, a consecuencia de la interposición de la demanda no se consuma con la sola presentación de la demanda, sino en el momento en el que se notifica al demandado, salvo que el retardo en notificar a este no se deba a culpa del demandante, por no haber realizado la actividad necesaria para que dicha notificación se efectuara, sino al demandado, por haber eludido esta, o al personal del juzgado encargado de hacerla, casos estos en los cuales la interrupción se entiende consumada con la presentación de la demanda” (G.J. números 2032, pág. 634 y 658; 2050 pág. 660; 2154, pág 132; 2318, pág. 120)”

“Es decir, que si a pesar de la diligencia del actor, el auto admisorio de la demanda no logra notificarse en tiempo a los demandados debido a evasivas o entorpecimiento de estos o por demoras de la administración de justicia o de otro tipo, que no sean imputables al reclamante, el ejercicio oportuno de la acción con la presentación de la demanda tiene la

virtud de impedir que opere la caducidad. Este criterio conserva plena vigencia, por estar inspirado en los supremos ideales de justicia y equidad, adaptados al derecho objetivo, a tal punto que a pesar de la doctrina antigua consideró que el concepto de caducidad estaba ligado a la idea de plazo extintivo e improrrogable – cuyo vencimiento produce el decaimiento de la acción de manera inevitable y sin tomar en consideración la actividad del juez o de las partes-, ello no fue obstáculo para que esa noción eminentemente teórica o especulativa cediera su rigor ante los supuestos concretos que plantea la realidad que está a la base del derecho actual”². (subrayas fuera de texto)

De ahí que la correcta interpretación de la norma que rige el caso impone al juez la obligación de tomar en consideración las referidas circunstancias subjetivas, a fin de no endilgar a la parte demandante unas consecuencias nocivas que no le son en modo alguno atribuibles por no ser producto de su negligencia³.

7. A efectos de desatar la excepción que es materia del debate por la parte demandada, debe compararse la fecha de vencimiento de las obligaciones que se cobran, la fecha de presentación del libelo y cuál hipótesis de las contenidas en el artículo 94 reseñado se cumple, según la fecha de notificación del mandamiento ejecutivo al demandado, así como si la tardanza en las notificaciones, fue o no por la negligencia del acreedor.

Del escrito genitor se tiene que la fecha de vencimiento de los títulos valores fueron en las que el demandante declaró vencido el plazo, esto es, para el pagaré No. No. 46181003293 el 7 de mayo de 2017 y del pagaré No. 46169769905 el 4 de abril de 2017, por lo que el término prescriptivo tendría lugar el 7 de mayo y 4 de abril de 2020 respectivamente.

A su vez se presentó la demanda que desató la litis el 24 DE OCTUBRE DE 2017 (Acta individual de reparto folio 26) y se libró orden compulsiva el 3 de noviembre de 2017, notificándose ésta última por estado del 7 de noviembre de la misma anualidad (fl.28 fte y vto), de manera que la interrupción solo operaría si el acto de intimación se presentara dentro de esa anualidad, es decir, hasta el 7 de noviembre de 2018.

Sin embargo, la parte convocada por intermedio de *curador ad-litem*, fue notificada hasta el 23 de marzo de 2021 [Folio 143], es decir, cuando ya había vencido el año que estipula la norma para que la presentación de la demanda interrumpiera la prescripción y para dicha data, en principio, ya se había configurado el fenómeno de acaecimiento, de no ser porque existen plazos que deben descontarse del mentado término.

En efecto, la tardanza en el enteramiento del ejecutado, observa el Despacho no se debió a la incuria o negligencia de la ejecutante, sino a tardanzas atribuibles a la administración de justicia, pues éste luego de intentar la notificación personal del demandado con resultados negativos, el 21 de enero de 2019, solicitó el emplazamiento de conformidad con lo establecido en los arts. 293 y 108 del C. G. del P., (fl.116), ante lo cual esta sede judicial, el 14 de febrero de 2019 [Folio 117],

² Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil – STC14529-2018 Radicación n. 11001-02-03-000-2018-02989-00 del 7 de noviembre de 2018 M.P Ariel Salazar Ramírez.

³ Sentencia de Casación SC5755-2014, dictada el 9 de mayo de 2014 dentro del radicado 11001-31-10-013-1990-00659-01

³ Folios 8 a 9 cuaderno principal

se dispuso el emplazamiento de la parte ejecutada, aportándose las publicaciones el 27 de marzo de 2019 [Folios 118 a 120], y finalmente en proveído del 20 de mayo de 2019 se procedió a designarle Curador Ad Litem para que concurriera a notificarse de la orden de pago y lo representara en el proceso. [Folio 123]

Adviértase que desde que se designó Curador Ad litem, hasta el momento en que se notificó la auxiliar de la justicia XIMENA ALEJANDRA VELASQUEZ SALCEDO (23 de marzo de 2021), transcurrió, alrededor de un (1) año y seis (6) meses, como quiera que el que se designó no concurrió a tomar posesión tal como se desprende del plenario.

Adicionalmente, debe hacerse notar que, con ocasión a la pandemia generada por cuenta del virus Covid 19, el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo PCSJA20-11517, dispuso la suspensión de términos a partir del 16 de marzo de 2020 y hasta el 1 de julio de la misma anualidad.

Por tanto, es posible concluir que efectivamente la parte demandante asumió las cargas procesales que le eran propias, pues antes de que venciera el término consagrado por el legislador para impedir que operara la prescripción (7 de mayo y 4 de abril de 2020), procuró no solo la notificación de los deudores, sino que ante el resultado negativo de la misma, pidió el emplazamiento de los ejecutados y la designación de un *curador ad-litem*, razón por la cual y teniendo en cuenta que en el presente caso se dan los presupuestos exigidos del precedente jurisprudencial antes citado, impide que la excepción de prescripción pueda prosperar.

Los anteriores razonamientos se consideran suficientes para declarar infundada la excepción de mérito analizada y, en consecuencia, se ha de ordenar seguir adelante con la ejecución en la forma dispuesta en el mandamiento de pago.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto anteriormente, el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bogotá, D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE:

PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADA la excepción de prescripción propuesta, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión judicial.

SEGUNDO.- Seguir adelante con la ejecución, en la forma y términos señalados en el mandamiento de pago adiado 3 de noviembre de 2017 [Folio 28 fte y vto Cd. 1].

TERCERO.- PRACTICAR la liquidación del crédito de conformidad con lo previsto en el artículo 446 del Código General del Proceso.

CUARTO.- DECRETAR el Avalúo y Remate del (los) bien(es) embargado(s) a la parte ejecutada y de los que posteriormente se embarguen, si fuere el caso, para el pago de las obligaciones que aquí se encuentran a cargo de las ejecutadas.

QUINTO.- CONDENAR en costas a la parte ejecutada, las cuales serán liquidadas en su oportunidad por la secretaría. Inclúyase por concepto de agencias en derecho, la suma de \$1.800.000.oo.

Notifiquese y Cúmplase⁴

IRIS MILDRED GUTIÉRREZ
Juez

A.M.C.B.

⁴ Esta providencia se notificó por estado No. 070 de 30 junio de 2021

Firmado Por:

**IRIS MILDRED GUTIERREZ
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 019 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C.**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c0859902b8c174e9cec8ee3a2f754d840eac8c400a409d4529780957b94b737a**

Documento generado en 29/06/2021 03:06:53 PM